



Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de 2021

#### **REFERENCIA**

**EXPEDIENTE No.:** 11001-33-35-010-2020-00190-00  
**ACCIONANTE:** YAIRTON DE JESÚS MOSQUERA PEREA  
**ACCIONADO:** NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**ASUNTO:** MEDIDA CAUTELAR

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante, previas las siguientes consideraciones:

#### **I. ANTECEDENTES**

YAIRTON DE JESÚS MOSQUERA PEREA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, tendiente a obtener la declaratoria de la existencia del silencio administrativo negativo, y consecuentemente la nulidad del acto ficto generado respecto de la petición radicada ante dicha entidad el día 5 de abril de 2018, en donde solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%, el subsidio familiar y la prima de actividad.

#### **II. EL TRÁMITE SURTIDO**

En acatamiento a lo previsto por el inciso segundo del artículo 233 de la citada ley, el Despacho a través de providencia de 29 de abril de 2021, corrió traslado a la demandada de la petición de medida cautelar, en aras de la protección a los derechos constitucionales de defensa y contradicción.

El auto en cita fue notificado personalmente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional el día 24 de mayo de 2021, quien no se pronunció al respecto.

#### **II. CONSIDERACIONES**

Dispone el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, que en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el operador judicial, decretar, previa motivación, las medidas necesarias para brindar protección y garantizar, de manera provisional, el objeto y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique un prejuzgamiento.



Por su parte, el artículo 230 de la misma norma, establece que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, hallándose dentro de ellas la de ordenar la adopción de una decisión administrativa.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que sean procedentes las medidas cautelares distintas a la suspensión provisional **deberán concurrir** los siguientes requisitos:

- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
- Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
  - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
  - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Atendiendo las normas transcritas, y una vez revisadas las piezas procesales dentro del presente proceso, encuentra el Despacho que en la medida cautelar no concurren la totalidad de los requisitos señalados en la ley, pues el aquí demandante no aportó los documentos idóneos para el estudio de fondo de la cuestión aquí debatida, no argumentó ni justificó las razones que permitieran concluir, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

En segundo lugar, la solicitud de medida cautelar presentada tampoco cumple ninguna de las condiciones tanto del perjuicio irremediable, como de que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Ello, teniendo en cuenta que, como ya fue mencionado en párrafos anteriores, el demandante no aportó el material probatorio pertinente, además, de los suficientes elementos fácticos que lograran demostrar que al accionante le hubiera sido suspendida alguna prestación social, y que de no llegar a expedirse un acto



administrativo que suspenda dicha actuación, se le generaría un grave perjuicio, que conlleve un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, tanto moral como material<sup>1</sup>, pues de la revisión de las pretensiones se tiene que lo que aquí se debate es el reconocimiento de unas acreencias laborales dejadas de percibir por el Soldado Profesional Yairton de Jesús Mosquera Perea, quien se encuentra activo al interior de la Institución, por lo tanto, es claro que devenga un salario y está cobijado por los beneficios que conlleva la seguridad social, sin lograr evidenciarse situación contraria a lo antes manifestado, atendiendo el escaso material probatorio visible en el expediente.

Conforme a las anteriores razones, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar, por cuanto no concurrieron los requisitos establecidos en la ley, para que sean procedentes las medidas cautelares solicitadas.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: NEGAR** la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la Secretaría del Despacho que, una vez notificado el presente auto, ingrese el expediente para continuar con el trámite procesal correspondiente.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR**  
**JUEZ**

346

---

<sup>1</sup> Lo anterior fue delimitado por la Corte desde la sentencia T-225 de 1993, Magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa y reconocidas por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993, Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.